

JUNIO 11 DE 1919

10.^a REUNION — 8.^a Sesión ordinaria

PRESIDENCIA DE LOS SRES. D. ARTURO GOYENECHÉ Y DR. VALENTIN VERGARA

DIPUTADOS PRESENTES: Agote Luis, Aldao Ricardo, Anquín Ireneo de, Arámburu Juan B., Arancibia Rodríguez A., Aranda Macedonio, Araya Rogelio, Arce José, Avellaneda Marco Aurelio, Avellaneda Nicolás A., Barceló Alberto, Becú Carlos A., Beiró Francisco, Bonifacio Benjamín, Bravo Mario, Bunge Augusto, Cabrera Enrique, Caracocha Pedro, Carosini Alberto H., Carranza Wenceslao C., Casás José O., Cornet Pedro L., Corvalán Santiago E., Costa Julio A., Davel Ricardo J., Demaría (hijo) Mariano, Diekmann Enrique, Escobar Adrián C., Fernández Jacinto, Ferrarotti Juan Luis, Ferreyra (hijo) Andrés, Galindez Francisco R., Garat Damián P., Garro Allende Juan L., Gatica Teófilo I., Gibert Pedro F., González José Antonio, Goyeneche Arturo, Hernández Sabá Z., Iricando Néstor de, Isnardi Arturo, Lagos Lauro, Laurencena Miguel, Maizana Julián, Martínez Enrique, Massa Arturo H., Melo Carlos F., Méndez Casariego Alberto, Moreno (hijo) Rodolfo, Mosca Enrique M., Mouesca Eduardo M., O'Farrell Juan, Pailla Eduardo, Pailla Ernesto H., Pagés Pedro T., Raffo de la Reta Julio C., Repetto Nicolás, Rúa Francisco A., Robín Castro Napoleón, Rodríguez Alfredo, Rodríguez Carlos J., Rodríguez Jorge Raúl, Rubilar Francisco, Sánchez Sorondo Matías G., Solanet Pedro, Solari Benjamín T., Tamborini José P., Usancivaras Agustín, Vaca Narvaja Jesús, Valle Delfor del, Vergara Valentín, Videla Horacio C. DIPUTADOS AUSENTES: CON LICENCIA: Bermúdez Manuel A., Cabrera Anibal, Leguizamón Arturo, Páez José E., Puch Angel E. CON AVISO: Berrondo Valentín, Carrasco Alejandro M., Danceri Luis M., Jaramillo José M., Justo Juan B., Martínez José María, Martínez Zuviria Gustavo, Molina Víctor M., Moreno J. Alejandro, Pérez Virasoro E., Prieto Carlos M., Quiroga Marcial V., Sánchez Bustamante T., Santamarina Antonio, Tomaso Antonio de, Vilar Roberto, Villarreal Agustín J., Zalazar José María. SIN AVISO: Aráoz Miguel A., Atencio Juan V., Brard Eugenio E., Caballero Ricardo, Conero Octavio, Cornejo Julio, Gallegos Moyano Carlos, Hernández Digenes, Jiménez Beltrán Dámaso, Lehmann Guillermo, Montes José Antonio, Oliva Moisés J., Remonda Mingrard F., Rougés León, Sosa Leopoldo, Vera Octaviano S.

SUMARIO

- 1.—Sesión en minoría.
- 2.—Sesión en mayoría. Se aprueba el acta de la sesión anterior.
- 3.—Asuntos entrados.
- 4.—Proyecto de ley de los señores diputados: doctores Rodolfo Moreno (hijo) e ingeniero Pedro T. Pagés sobre fijación del precio de los alquileres en la capital federal.
- 5.—El señor presidente nombra la comisión encargada de estudiar la propuesta sobre instalación mecánica para votaciones.
- 6.—Homenaje en memoria de los aviadores Giovanardi, Sarmiento y Sartorelli.
- 7.—Intégrase la comisión de códigos.
- 8.—Consideración y aprobación del despacho de la comisión de instrucción pública en el proyecto de ley del señor diputado doctor Luis Agote, sobre aneación del colegio nacional central a la universidad de Buenos Aires.
- 9.—Manifestación del señor diputado doctor Matías G. Sánchez Sorondo respecto de algunos conceptos vertidos en la sesión anterior.
- 10.—Consideración del despacho de la comisión de instrucción pública en el

proyecto de ley del señor diputado don Jorge Raúl Rodríguez sobre creación de la universidad nacional de Santa Fe.

—En Buenos Aires, a 11 de junio de 1919, siendo las 3 y 35, ocupan sus asientos en el recinto los señores diputados en minoría.

1

EN MINORIA

Sr. Presidente (Goyeneche). — Ha llegado la hora reglamentaria y solamente hay presentes 54 diputados.

Sr. Rodríguez (J. R.). — En atención a que la huelga de automóviles y carruajes habrá dificultado a muchos señores diputados llegar a hora oportuna al recinto, hago indicación para que la cámara espere hasta las 4, sin perjuicio de que si hubiera quórum antes, la presidencia llame a sesión así que constate esa circunstancia.

Sr. Gibert. — Entiendo que esa moción no se puede votar porque ya existe, a mi juicio, una resolución de la cámara en mayoría que establece la

Se ve en la actualidad, como se ha comprobado con anterioridad, que en la facultad de medicina de la capital federal, el número de alumnos aumenta en una forma tal que la capacidad de su edificio es pequeña para dar cabida a todos y la enseñanza dada en los últimos años ha tornado a decaer por esa causa. En el Rosario hay un promedio de ocho cadáveres diarios que van al crematorio por falta de deudos, los que se utilizaban para los trabajos anatómicos, mientras que en Buenos Aires por la afluencia considerable de alumnos, no se puede conservar una proporción regular.

En el año 1917 para la enseñanza de anatomía descriptiva, para 687 alumnos, sólo hubo 200 cadáveres para la práctica, lo que nos señala 1 cadáver por 3 alumnos y en un año entero. La práctica en esa forma resulta pobre. Para anatomía patológica, en el mismo año, en la práctica de las autopsias, 483 alumnos han recibido 45 cadáveres, lo que representa un cadáver para 10 alumnos, durante todo el curso. Y si seguimos enumerando, llegaremos a conclusiones semejantes en los laboratorios, etc. Y ese es uno de los principales motivos por que se implantó el examen de ingreso a la facultad de ciencias médicas de la capital federal, que nos representa un argumento a favor de nuestra solicitud y deseos de pronta apertura de la universidad nacional de Santa Fe, con todo esto llegamos a conclusiones que: es necesaria la creación de una nueva facultad de medicina en la república y siendo evidente esto, es razonable que se instale en el Rosario, por lo siguiente:

Porque Rosario no es sólo una ciudad de importancia, condición precisa para la sede de una facultad de medicina, sino que tiene un gran campo donde accionar, en materias afines con las ciencias médicas.

Porque su situación geográfica es el centro de todo el litoral argentino y por esa causa, debido a que el litoral es el territorio más poblado del país, no puede depender con exclusividad de Buenos Aires en la enseñanza superior.

Como hemos dicho anteriormente, Rosario tiene elementos y fuerza para efectuar esta enseñanza universitaria; para el profesorado cuenta con elementos preparados, que en más de una ocasión han exteriorizado que no tendrían inconveniente en dictar sus cátedras en carácter "ad-honorem". El edificio de la facultad, cuya construcción ha dirigido con tanto tesón como energía la comisión "Pro-hospital Centenario" y "Escuela de Medicina" puede dar capacidad para los primeros años a 500 alumnos (Córdoba tiene esa cifra. Montevideo menos) pudiéndose elevar esta cantidad si las necesidades ulteriores lo exigen.

El pensamiento de crear la facultad de medicina en el Rosario, colocando su piedra inaugural, fué una de las pocas obras buenas y materiales, con que se res-

tejó el centenario del día en que nuestros antepasados lanzaron su primer grito de libertad. Los habitantes del Rosario dieron su entusiasmo coadyuvando a la labor emprendida y compenetrados de su misión se esfuerzan por darle a esta obra el carácter noble que merece, y pide al honorable cuerpo legislativo que le dé su apoyo; y porque lo pide el pueblo, la juventud estudiantosa argentina evocando esa fecha gloriosa que vió resurgir de su seno una nación libre, es que nos hacemos intérpretes de esos nobles sentimientos y pedimos a la honorable cámara de diputados la aprobación del proyecto de referencia.

Los compañeros de Santa Fe, por su órgano legítimo, la federación universitaria, y la juventud del Rosario por medio del centro de bachilleres, unidos por el franco vínculo de amistad y por el abrazo de hermanos, pedimos a la honorable cámara de diputados una pronta sanción, favorable al despacho de la comisión de instrucción pública del proyecto del diputado nacional, señor Jorge Raúl Rodríguez, que crea la universidad nacional de Santa Fe, con base de la instalación de ciencias médicas en Rosario y nacionalización de la que existe en Santa Fe.

Saludando al señor presidente con nuestra atención más distinguida, somos sus señeros servidores.

El presidente. — El secretario.

FIJACION DEL PRECIO DE LOS ALQUILERES

PROYECTO DE LEY

El senado y cámara de diputados, etcétera.

Artículo 1.º — El alquiler de toda finca situada dentro del distrito que forma la capital federal y cualquiera que fuese su destino no podrá exceder del 7 por ciento del valor fijado a la propiedad para el pago del impuesto de contribución territorial.

Art. 2.º — El porcentaje fijado en el artículo precedente rige también para los que subarriendan, quienes tampoco podrán excederlo, en el alquiler que fijen a los ocupantes.

Art. 3.º — Los que subarrendaren piezas o fracciones de terreno, deberán hacer saber a los inquilinos o arrendatarios, colocando la constancia en los recibos que otorguen, la cantidad que pagan por el conjunto, a la persona con la cual han contratado el arriendo.

Art. 4.º — El propietario o el locador de un subarrendatario, podrá rescindir el contrato celebrado, si este último no cumple con respecto a las personas a las cua-

les subarrienda, con las obligaciones establecidas en la presente ley, y sin perjuicio de las demás responsabilidades.

Art. 5.º — En todo recibo de pago de alquiler expedido por un propietario o locador a favor del ocupante, se indicará la cantidad en que se encuentra valuada la propiedad, a los efectos del pago de la contribución territorial. Si se trata de edificios que se encuentran juntos, se expresará que la cantidad se refiere al conjunto.

Art. 6.º — Los jueces de paz resolverán de manera breve y sumaria las reclamaciones presentadas por los inquilinos contra los contraventores, ya sean propietarios o locadores de subarrendatarios. Se tendrá como prueba el recibo del mes anterior a aquél en que se formule la denuncia y el informe correspondiente de la dirección de contribución territorial y patentes. El fallo será apelable ante el juez de primera instancia, el que resolverá sin ningún trámite.

La sentencia se pronunciará sobre la reducción del alquiler o su mantenimiento y sobre la devolución del exceso pagado en el mes en que se entable la demanda, en el anterior, y los siguientes hasta la fecha del fallo.

Art. 7.º — No se admitirá demanda alguna que no se presentase acompañada del recibo de pago de alquiler correspondiente al mes anterior o a aquél en que la demanda se presente.

Art. 8.º — Esta ley empezará a regir seis meses después de su promulgación. El poder ejecutivo dentro de ese término procederá a verificar una nueva valuación de la propiedad raíz en la capital federal, conforme a las disposiciones vigentes y sobre la base de la declaración de valor de la propiedad, hecha bajo juramento por el propietario.

Rodolfo Moreno (hijo). — Pedro T. Pagés.

Sr. Moreno (R). — Señor presidente:

La carestía de la vida, fenómeno universal que repercute entre nosotros, reclama la acción constante de las autoridades. Es indudable que la mayor eficacia no puede derivar de la obra de los legisladores, sino de la acción ejecutiva, ya sea proveniente de los gobiernos nacional o de provincias o de las municipalidades.

En la capital federal, serían el presidente de la república y el intendente municipal los funcionarios más habilitados para tomar medidas y para proyectar preceptos generales, porque tienen todos los elementos a la mano y poseen las fuentes de información necesarias. Pero como esa acción falta y el congreso no puede permanecer ajeno a las necesidades sociales, nos hemos preocupado, antes y ahora de proporcionar normas de legislación que tiendan a evitar o disminuir males colectivos.

En la comisión pro abaratamiento de la

vida, de la cual formamos parte los firmantes de este proyecto, trabajamos recogiendo datos en los lugares mismos donde se negocia en artículos de primera necesidad y presentamos varios despachos que fueron considerados por la cámara. Pero la mayor parte de ese esfuerzo no se tradujo—por motivos ajenos a nosotros,—en medidas de beneficio común. Así la ley que ampliaba los servicios del transporte oficial, encargando al correo la remisión de encomiendas hasta de veinte kilogramos de peso, no se ha cumplido. Esa ley tendía a facilitar la comunicación entre los productores y consumidores, siendo posible por medio de ella, solicitar a los lugares de producción, cualquiera que fuese la provincia en que estuvieran situados los artículos producidos, los que serían llevados a la casa del consumidor, quien podría devolver los envases.

Parecería al que no conoce los antecedentes, que esa ley se había sancionado sin tener en cuenta las dificultades de hecho, que pudieran presentarse para el correo, no sólo en cuanto a su personal, sino en relación con los ferrocarriles. Pero el que se tome la molestia de leer el informe y de estudiar la carpeta que la comisión formó reuniendo antecedentes, observará que antes de presentarse el despacho, se requirieron los informes necesarios.

La dirección general de correos no sólo aceptó la idea, sino que aportó datos con los cuales pudo completarse el proyecto original de los doctores Sagüier y Le Bretón, que estaba bien orientado, pero que era deficiente. Nos informó además que tenía convenios hechos con los ferrocarriles, los que le permitían asegurar el transporte de las nuevas encomiendas y se manifestó partidaria de la realización del propósito. La ley se sancionó hace dos años y hasta ahora, a pesar de haberse promulgado, no se ha puesto en vigor. He ahí una iniciativa que hubiera producido un contacto directo entre productores y consumidores, que hubiera suprimido intermediarios y que hubiera abaratado la vida, anulada por la inacción del poder ejecutivo que no cumple las leyes del congreso.

El proyecto sobre represión de los trusts se encuentra encarpeta en la cámara de senadores. Ese proyecto fué estudiado y despachado también por aquella comisión especial y mereció sanción de esta cámara.

La misma ley que suprimió impuestos municipales, no se puso en ejercicio y la autoridad comunal siguió cobrando como hemos podido comprobar, impuestos de sisa.

Pero con todo, nosotros creemos que el legislador no debe abandonar sus tareas; lo que corresponde hacer en todo caso, es proyectar dando a los particulares favores, o afectados, los elementos necesarios para que ellos mismos puedan poner en eje-

cución las leyes, por intermedio de los jueces.

En los últimos tiempos se han producido movimientos tendientes a conseguir la rebaja de los alquileres. Se han reunido asambleas y se ha llegado hasta propiciar la huelga de pagadores. No justificamos la violencia. Entendemos que en un país que tiene una legislación liberal y adelantada como es el nuestro, lo que cabe es modificar las leyes si es necesario, pero no lanzarse a los excesos que crean la guerra interna. Cuando se empieza en ese camino, es difícil saber dónde se terminará porque unas violencias engendran las otras y para contestar a la recibida se emplea una intensidad mayor.

Entendemos sin embargo que debemos encarar el problema y resolverlo de manera justa para unos y para otros, es decir, evitando la explotación de los inquilinos e impidiendo también el desconocimiento de los derechos del propietario. Ese justo medio se encuentra en la limitación del interés del capital, considerando como valor de los inmuebles al que acepta el mismo dueño cuando le tasan la propiedad a los efectos del pago de la contribución territorial.

En la legislación comparada nos hemos encontrado con un antecedente: el proyecto presentado el 24 de marzo del corriente año por los diputados Rossi y Fernández Ríos a la cámara de representantes de la República Oriental del Uruguay.

Ese proyecto se ha publicado en la página 288 del primer tomo del Boletín mensual de la biblioteca de nuestro congreso nacional.

Pero ese proyecto contiene simplemente una idea desenvuelta de manera incompleta, de tal modo que si se sancionara una ley siguiendo al referido proyecto, no se obtendrían las consecuencias perseguidas.

Según ese proyecto, el alquiler de toda finca situada en aquella república, no podría exceder del 6 por ciento del valor fijado a la propiedad para el pago del impuesto de contribución inmobiliaria. Los inquilinos podrán reclamar ante el juez cuando el porcentaje fuere mayor y esa autoridad resolverá de manera sumaria. El proyecto no dice desde luego lo que deben resolver los jueces, esto es: si la reducción del alquiler o el aumento del monto de la avaluación; no afrontando por tanto una cuestión que es fundamental para la eficacia de la ley.

Como se refiere sólo a los propietarios, éstos podrían fácilmente cumplir con lo establecido y burlar sus efectos. Bastaría para ello con que arrendasen dentro del margen del porcentaje establecido y que los arrendadores respectivos subarrendaren en las condiciones que les pareciera. La ley se cumpliría y el propósito perseguido no se habría conseguido.

Y no sería posible resolver este problema castigando al propietario, porque él po-

dría no ser un cómplice del locador desde que las cláusulas respectivas al porcentaje sólo regirían para él y no para quien le arrienda y a su vez subarrienda a otros que son los ocupantes.

El proyecto fuera de las cláusulas a que me he referido, contiene ocho artículos más relativos a cuestiones ajenas a las que deben ser en nuestro concepto materia de la ley. No tocamos desde luego lo relativo a baldíos, porque ya se encuentran sujetos a una nueva valuación, ni a los impuestos que deben pagarse para construir edificios nuevos porque esa es materia que debe regir la municipalidad.

Limitamos, por lo tanto, los efectos del proyecto a la capital federal, porque en esta materia el congreso no debe invadir las jurisdicciones provinciales, y no lo extendemos a los territorios, porque en ellos no se ha hecho sentir todavía la necesidad que se revela en nuestro gran centro urbano.

Empezamos por considerar que el valor de la propiedad es el que se fija a los efectos del pago de impuestos de contribución territorial. En la determinación de ese valor que se verifica por el fisco con la conformidad del propietario, existe acuerdo entre una y otra parte. Para que no puedan observarse las tasaciones actuales, se dispone una nueva valuación, la que deberá hacerse partiendo de la base de la declaración jurada vertida por el propietario. Esa sola medida dará resultados interesantes, bajo el punto de vista fiscal pues la propiedad raíz se encuentra generalmente evaluada en un precio inferior al verdadero. Hoy los propietarios tratan de reducir el valor real para pagar menos: con esta ley no podrán hacerlo porque la reducción los afectará desde que el valor se encuentra vinculado al interés que pueden cobrar, y es sabido que a menor capital menor rendimiento y viceversa.

Fijamos el interés del 7 por ciento que es el que cobra el Banco de la Nación y el Banco Hipotecario Nacional en los préstamos que respectivamente concluyen. Las operaciones corrientes y los títulos que se ofrecen de ordinario para la colocación de capitales, nos demuestran que el dinero se invierte bien cuando se puede obtener un interés del 6 por ciento; de manera que fijar el 7 por ciento no significa establecer una limitación inconveniente. Sin embargo, la comisión a la cual pase este proyecto puede tomar antecedentes y hacer un estudio teniendo en cuenta los impuestos actuales y lo que puede producir el territorial con la nueva valuación, para adoptar un criterio definitivo. Nosotros lo que deseamos principalmente es que el precio de la locación no quede librado a la arbitrariedad de los propietarios de fincas que alquilan y ob-

tienen una renta como consecuencia de su contrato.

Extendemos la obligación para evitar maniobras a todos los que arriendan o subarriendan, pues de esa manera se establece de verdad un amparo a favor de los inquilinos, que son generalmente los más pobres.

Aceptado el principio, el que se ha considerado susceptible de aplicación no sólo en los proyectos de ley contra la usura, sino en virtud de lo dispuesto por el artículo 623 del código civil que condona el "anatocismo", es necesario proveer a la ejecución.

Podrían seguirse dos caminos.

Uno netamente fiscal y otro de amparo a los inquilinos. El fiscal sería el que se adoptase procediendo a elevar la valuación, en el caso de comprobarse la falta de relación entre la renta y el valor de tasación, a los efectos de que la misma se restableciera. Y así si un propietario tuviese su finca tasada en 20.000 pesos moneda nacional y cobrase por arrendamiento 2.800 pesos en lugar de 1.400 que sería el 7 por ciento de 20.000 pesos, como eso demostraría que la propiedad valía 40.000 pesos, la consecuencia consistiría en elevar la tasación hasta esta última suma.

Pero con ese procedimiento se favorecería al fisco solamente y no a los inquilinos y nuestro proyecto no tiene propósitos fiscales sino sociales. Por eso hemos pensado en la acción de reducción del alquiler que se confiere a todo inquilino contra su arrendador a fin de que le cobre la cantidad que corresponda y nada más.

Para evitar la injusticia y no hacer de esta ley, un arma fácil en manos de los malos pagadores, se ha tenido la precaución de establecer que la acción sólo podrá ser entablada por los inquilinos que hayan pagado el alquiler del mes anterior al de la demanda; y para que los inquilinos sepan en cuanto están valuadas las propiedades, se exige la declaración en los recibos. Esto último constituye también un interesante contralor fiscal.

Si los propietarios en sus declaraciones incurriesen en falsedad, los preceptos de las leyes penales ordinarias les serían aplicados.

Dejamos así fundado el proyecto para el cual esperamos la atención de la comisión respectiva y de la cámara en su oportunidad.

Sr. Moreno (R.) — Pido la palabra.

Es para dejar una simple constancia.

En la sesión de ayer he presentado, con el señor diputado Pagés, un proyecto por el cual se establecen castigos para los que destruyan artículos de primera necesidad, y ahora se acaba de dar cuenta de otro proyecto, estudiado con ese mismo colega, sobre

fijación de los alquileres en relación con el valor de tasación que tiene la propiedad, a los efectos de la contribución territorial.

Hemos tenido que presentar esos proyectos con fundamentos individuales, a causa de preceptos reglamentarios, y he tenido que llevar la palabra; pero quiero dejar constancia de que tanto los proyectos como los fundamentos se han hecho en común por el señor diputado Pagés y por el que habla, constancia que deseo dejar porque no quiero aparecer como apropiándome el trabajo ajeno.

Sr. Presidente (Goyeneche). — Pasará a la comisión de legislación.

5

COMISION NOMBRADA

Sr. González. — Pido la palabra.

La comisión de justicia está desintegrada con motivo de la renuncia del señor diputado Marcó. Procedería, entonces, que se integrara.

Sr. Presidente (Goyeneche). — Oportunamente la integrará la presidencia.

Sr. Secretario (Zambrano). — La presidencia ha designado a los señores diputados Arámburu, Demaría y Bunge para formar la comisión encargada de estudiar el proyecto sobre instalación de aparatos para tomar las votaciones.

6

HOMENAJE

Sr. Escobar. — Pido la palabra.

Una horrible desgracia, señor presidente, ha segado la vida de tres intrépidos soldados que la habían ofrecido a sus patrias respectivas, a la República Argentina y a Italia. Rindamos, pues, un homenaje a esos valientes caídos, puede decirse, en el campo del honor.

Italia, la amiga de todos los tiempos,